

La Economía Argentina del Intervencionismo a la Globalización

Adrián Silva

Los hechos

La caída del peronismo en 1955 trajo como consecuencia profundas modificaciones en el campo político, pero también, cambios socioeconómicos que marcarían fuertemente los sucesos de las décadas siguientes. Se venía de una economía cerrada, dirigida al mercado interno, con fuerte poder sindical, predominio de la clase industrial protegida y un sector agropecuario que había sido marginado durante la mayor parte del gobierno peronista. La inflación se había instalado en la sociedad, aunque muy lejos aún de la virulencia que alcanzaría posteriormente. La política distributiva posibilitó el desarrollo de una fuerte clase media, con salarios reales elevados y con conquistas sociales nunca antes alcanzadas. Si bien los pilares del poder económico, basados en la propiedad urbana y rural no habían sido afectados en profundidad, el fuerte intervencionismo que se presenta durante el gobierno peronista, posibilitó un control estricto de las actividades, como ocurriera con el sector financiero, que se vio fuertemente condicionado por las reglamentaciones. Esto se complementó con el aislamiento del país, en relación con los centros de poder mundial y a las instituciones financieras internacionales.

En 1956, el gobierno militar invierte el proceso, decidiendo el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional, interviniendo la CGT, congelando salarios, liberando el tipo de cambio y dando prioridad al sector agropecuario como fuente principal de generación de divisas. En este período comienza la caída de la participación salarial en el ingreso nacional, produciéndose una transferencia hacia los sectores de altos ingresos. Pese a las medidas antes mencionadas, tanto la inversión pública como privada declinan en términos reales durante el período correspondiente al gobierno de Aramburu.

Al llegar el desarrollismo al poder en 1958, decide producir un cambio profundo en el esquema económico, abriendo la posibilidad de radicación de capitales extranjeros para completar la etapa del desarrollo de la industria pesada y en busca de eliminar el crónico estrangulamiento de nuestra balanza de pagos. Naturalmente, se daba por sentado la necesidad de alcanzar una expansión productiva, para lo cual era absolutamente necesaria la afluencia masiva de capitales foráneos y la búsqueda de un crecimiento del ahorro interno.

Esto último implicaba eliminar los ajustes salariales por costo de vida y generar confianza en los centros financieros internacionales, para lo cual se firma un stand-

by con el Fondo Monetario Internacional que implicaba duras condiciones para la población. Al mismo tiempo se impulsa el crecimiento industrial mediante medidas protectoras, pero liberando de trabas aduaneras la importación de bienes de capital. La nueva ley de inversiones extranjeras, que ponía en un pie de igualdad a las empresas locales y extranjeras favoreció la llegada de inversiones en las industrias de base. Es así que se radican industrias automotrices, químicas, petroleras y siderúrgicas. Al mismo tiempo la inversión pública en infraestructura se eleva sustancialmente. La inflación va cediendo paulatinamente, luego de una fuerte suba en 1959.

Pero la resistencia del sector asalariado por la continua pérdida de participación, la merma en las exportaciones que implicó un fuerte endeudamiento externo y la pérdida de confianza en el sostenimiento del tipo de cambio, provocaron el debilitamiento del proyecto desarrollista.

A su vez, los sucesivos planteos militares, que jaquearon continuamente al gobierno y terminarían por derrocarlo, generaron una fuerte inestabilidad política que inevitablemente repercutió en la economía del país. Esto se vio agravado por la resistencia generada entre los sectores más nacionalistas, frente a las concesiones petroleras a empresas extranjeras.

La política frondicista, como sostiene Ferrer, presentaba una doble faz; por un lado mostraba la posibilidad de imponer un ritmo agresivo a la inversión, pero por otro lado y en el marco de una política sustitutiva de importaciones, tan utilizada en la época, se abusó de la misma, disminuyendo las compras externas más allá de lo aconsejable. Otra de las críticas habituales está referida al excesivo número de firmas radicadas para una misma industria, que como es sabido afecta la economía de escala y repercute en los costos y precios internos.

El período comprendido entre 1962 y 1963 se basó en medidas de corte ultraliberal que provocaron una fenomenal recesión, una caída violenta de los salarios reales y una fuerte transferencia de ingresos en favor de los sectores exportadores primarios. Las consecuencias se visualizan en una caída del PBI para el período, del orden del 9%, un desempleo del 10% y una utilización de la capacidad instalada de alrededor del 50%. Las quiebras fueron generalizadas y muchas empresas nacionales terminaron en manos extranjeras, compradas a muy bajo precio.

La llegada del radicalismo al poder en 1965 trajo consigo la anulación de los contratos petroleros y un nuevo impulso a la industria nacional. Se consiguió reducir sustancialmente la inflación y se alcanzó un modesto crecimiento. Las exportaciones crecieron fuertemente, arrojando un superávit comercial entre 1963 y 1966 de unos 1600 millones de dólares. En lugar de la acostumbrada devaluación masiva, que implicaba violentas transferencias de ingresos, se optó por ajustes periódicos y de menor cuantía en el tipo de cambio. Al mismo tiempo se limitan las transferencias de capital al exterior, ejerciendo un mayor control sobre las mismas. Con gran

firmeza el gobierno rechazó los intentos de los organismos financieros internacionales para intervenir en los asuntos económicos internos. En este período hay una recuperación de los salarios reales y una expansión de la demanda global, con un aumento del producto bruto del 8% en promedio y una importante recuperación de la producción industrial; como consecuencia, disminuye en gran medida el desempleo. Pese a ello, los sindicatos dominados por el peronismo enfrentan duramente al gobierno.

Sin embargo, resulta criticable en este período la expansión del Gasto Público, dado que se orientó en forma significativa hacia los gastos corrientes y no hacia la inversión. Asimismo, el modelo presentaba debilidades en cuanto a la búsqueda del avance tecnológico y de la capitalización, agravado por la fragilidad política de un gobierno que había llegado al poder con sólo el 23 % de los votos y con el peronismo proscripto.

Una vez más, en 1966, un golpe militar produce un cambio de rumbo en la economía. De la mano de Krieger Vasena se desarrolla un proceso de estabilización, que se acompaña con fuerte represión a la actividad sindical, pero en este caso el principal destinatario de la nueva política no es el sector ganadero como en otras épocas, sino los grupos industriales y financieros más poderosos. En este período ya se destaca la aparición de "grupos" empresarios que incrementarán su poder en la década siguiente.

A diferencia de las tradicionales políticas de ajuste utilizadas hasta entonces, se asume que el proceso inflacionario crónico tenía un componente principal en los costos de producción; es por eso que se congelan los componentes principales de los costos empresarios (salarios, tipo de cambio). La desaceleración inflacionaria fue notable, pero no estuvo acompañada por una caída similar en las tasas de interés que se tornaron fuertemente positivas, lo que afectó los costos financieros, principalmente de las PYMES. Un hecho positivo se presenta en la expansión de la construcción privada, luego de muchos años de baja actividad.

Podemos decir que durante el gobierno de Onganía se consolida el proceso de concentración empresarial y el avance de las empresas extranjeras en los sectores más dinámicos de la economía. Pero entre 1969 y 1970 se producen hechos económicos y políticos que una vez más provocarán mutaciones en el poder, que repercutirán sobre el rumbo de la política económica. Entre los primeros merece destacarse la inversión del ciclo ganadero que redujo sensiblemente la oferta interna y consecuentemente afectó los precios internos. Entre los segundos, las jornadas del "cordobazo" y el asesinato del General Aramburu inauguraron una época de violencia desconocida en el país.

Al ser relevado del poder el General Onganía, nuevamente toma impulso el proceso industrialista con políticas de corte nacionalista, como fue el caso del denominado "compre nacional", consistente en la obligatoriedad de adquirir insumos y

bienes nacionales por parte del sector estatal; al mismo tiempo se brinda un fuerte apoyo a las exportaciones, sobre todo las de origen industrial. Se implementaron controles a las salidas de capital y se estimuló la demanda global a través de la inversión pública, con el objeto también de mejorar una infraestructura que se mostraba obsoleta. Asimismo se restablecieron las convenciones colectivas de trabajo y se impuso una veda en la faena de ganado vacuno por la merma antes mencionada, que se manifestaba en el crecimiento del índice de precios, dada la importancia que tiene el consumo de carne en la conformación de dicho índice. Se crea en este período el Banco Nacional de Desarrollo, con el objetivo manifiesto de fomentar la actividad industrial y mejorar la infraestructura de energía, transporte y comunicaciones. Las operaciones debían dirigirse exclusivamente a empresas controladas por capitales nacionales. No obstante, la recurrente inflación y los conflictos entre sectores políticos y militares impedían lograr concertaciones duraderas que ayudaran a generar un crecimiento sostenido.

Al llegar nuevamente el peronismo al poder, se impuso una tregua social con acuerdo de precios y salarios. Pero la "inflación cero" del ministro Gelbard no estaba sustentada en bases firmes, dado el excesivo Gasto Público y las continuas exigencias sindicales que no estaban acompañadas con aumentos de productividad. Por otra parte, se manifiestan las consecuencias de la crisis petrolera mundial. Así se llega a 1975, donde se produce un hecho que cambiaría fundamentalmente el comportamiento de los agentes económicos.

Ese fenómeno conocido como el "rodrigazo" generó un golpe inflacionario de tal magnitud, que de la noche a la mañana se produjo una violenta transferencia de ingresos, generando a su vez una masiva reacción sindical y logrando aumentos desmesurados que reavivan el proceso inflacionario. Los endeudados a tasa fija vieron licuarse sus deudas, y los acreedores fueron afectados profundamente en su patrimonio. Esto instauraría un perverso sistema de indexación, que actuará como mecanismo realimentador en los aumentos de precios durante muchos años.

La última parte del gobierno de María Estela Martínez de Perón se caracterizará por continuos cambios en el área económica, junto con la pérdida de confianza externa e interna, para finalizar envuelto en una inflación galopante.

El proceso militar inaugurado en 1976 trae consigo una filosofía económica basada en la confianza absoluta en los mecanismos del mercado. Sus primeras medidas no fueron muy diferentes a las tomadas por otros equipos de orientación liberal, es decir políticas de estabilización basadas en una fuerte caída del salario real, liberación de tasas, eliminación de restricciones a la importación, etc.

Pero a fines de 1978, el Ministro Martínez de Hoz instrumenta el modelo monetarista basado en las ideas de Milton Friedman y sus discípulos de la Escuela de Chicago.

Los objetivos explícitos eran la búsqueda de una convergencia entre las tasas de

inflación y de interés, locales e internacionales. A estos efectos utilizó una "tablita", en la que se proyectaba un ritmo de devaluación decreciente acompañada de un fuerte proceso de apertura externa, sin precedentes en los últimos cincuenta años. Se admitía un período de transición por el diferente ritmo de ajuste según se tratara de bienes "transables" o "no transables". Se esperaba que de esta manera se alcanzaría finalmente una modificación del esquema de precios relativos y un aumento en la productividad global, dado que la política arancelaria provocaría la desaparición de los sectores menos eficientes.

La ansiada convergencia no se logró, dado que el ajuste en los "transables" se dio muy lentamente y a su vez los bienes "no transables" no completarían el ajuste. Asimismo las tasas de interés no sólo no disminuyeron, sino que terminaron siendo elevadísimas, dado los altos costos de intermediación y una creciente desconfianza en el mantenimiento del esquema, acentuada a partir de la caída del Banco de Intercambio Regional.

Las consecuencias de esta política fueron nefastas: el tipo de cambio se sobrevaluó en forma continua, generando un fuerte déficit comercial a partir del masivo ingreso de productos importados. Este déficit se intentó cerrar estimulando el ingreso de capitales financieros, pero estos eran capitales cortoplacistas que acudían en busca de un rápido aprovechamiento del diferencial de interés.

Para la industria significó el inicio de un proceso desindustrializador que nunca se revertiría totalmente. El fuerte atraso cambiario y el endeudamiento llevó al cierre de numerosas empresas, en las cuales las deudas superaban en muchos casos, el valor de los activos.

La caída de instituciones financieras generó un proceso de sostenida demanda de dólares que derivó en continuas devaluaciones, que agudizaron aún más la crisis.

A su vez el Gasto Público creció desmesuradamente, pese a que desde el gobierno se agitaba el eslogan de "achicar el Estado". En este aumento influyeron sin duda los gastos militares por el probable conflicto con Chile y más tarde por la guerra de Malvinas. Pero también la realización de gastos para el Mundial de Fútbol, la remodelación de aeropuertos, la construcción de autopistas con avales del Estado, etc. A su vez, las condiciones económicas iniciales del proceso inducían a la toma de créditos externos para la modernización tecnológica, lo que provocó un fortísimo crecimiento de la deuda externa.

La derrota de Malvinas aceleró la crisis del proceso militar, que se vio acompañada de una gravísima situación para la economía nacional. En 1982, el entonces presidente del BCRA, Domingo Cavallo licua los pasivos empresarios, otorgando refinanciamiento a tasa regulada en medio de una alta inflación. Poco tiempo después, ante la necesidad de hacerse de divisas, el Estado nacional otorga seguros de cambio a los endeudados con el exterior, estatizando de esa forma la deuda externa privada. A su vez, el abultado endeudamiento externo obliga a una severa restricción de

importaciones.

Con la restauración democrática, el gobierno radical hereda una situación de emergencia, con una casi inexistente existencia de reservas y un fuerte proceso inflacionario, sumado a la colosal deuda externa.

El período radical muestra en los tramos iniciales un comportamiento macroeconómico inestable, donde, como señala Kosakoff, se presentan fuertes desajustes en el proceso de acumulación y en el plano fiscal. La conflictiva situación con la banca acreedora en busca de un reconocimiento de la corresponsabilidad en la generación de la deuda externa no impide una salida más que importante de recursos, para cubrir aunque sea en parte los servicios de la deuda. Esto agudizará en forma continua el déficit fiscal.

La existencia de la deuda obliga al gobierno a la búsqueda de un permanente superávit comercial. A estos efectos se efectiviza una política de promoción de exportaciones, materializada a través de la aplicación de reembolsos a la exportación.

A las dificultades apuntadas, se debe sumar el contexto internacional, que es suma-mente desfavorable, dado que se combina una elevación de las tasas de interés internacionales, lo que potencia la deuda externa, con la caída de los precios internacionales de los bienes primarios (entre 1981 y 1985 caen un 50%), la lucha por los subsidios entre la CEE y los EE.UU., que perjudica nuestras exportaciones, y la carencia de crédito externo. Es por eso que la obtención de divisas se materializó más en la caída de importaciones que en el aumento de exportaciones.

El déficit fiscal fue un problema insoluble para la autoridad económica, porque la caída de precios de los exportables redujo la recaudación por impuestos a la exportación, pero también por la crisis terminal del sistema previsional, por el efecto Olivera-Tanzi (la inflación afecta la recaudación impositiva) y por los elevados servicios de la deuda.

En junio de 1985 se lanza el Plan Austral. Este plan, más allá de su resultado final, fue el primer intento serio para atacar los problemas estructurales de la economía argentina. Este plan combinaba medidas fiscales y monetarias con un congelamiento temporario de precios y salarios, un tipo de cambio fijo, un sistema de desagio para los contratos y una reforma monetaria. Los primeros resultados fueron positivos, deteniéndose la espiral inflacionaria, reduciendo el déficit fiscal y consiguiendo una reactivación de la economía, en medio de un fuerte respaldo de la población. Pero a fines de 1987 hay un relajamiento de la política fiscal y monetaria, mezcladas con ingredientes de tipo político, con lo que comienza el deterioro del plan. La emisión descontrolada de bonos estatales, la creciente desconfianza, los negativos mensajes hacia el frente externo por parte de los adversarios políticos, que afectaban el otorgamiento de créditos y la cercanía de elecciones presidenciales, aceleraron el proceso inflacionario. En una medida claramente desacertada para la situación imperante, el gobierno libera el mercado de cambios, lo que provoca un

efecto contrario al deseado y así el país se ve inmerso en la primera hiperinflación.

En julio de 1989 el peronismo retorna al poder. En los momentos iniciales presenta una alianza estratégica con la multinacional argentina Bunge y Born, otrora archienemiga del justicialismo, pero al no alcanzarse los resultados esperados, la experiencia termina rápidamente. Mientras tanto la deuda interna crece a pasos agigantados y se llega a una situación insalvable que deriva en la segunda hiperinflación. En esta coyuntura se lanza el Plan Bonex que convierte la deuda interna en externa, reemplazando deuda local por bonos externos. Pero era evidente que únicamente con la realización de cambios profundos, de naturaleza estructural, podría revertirse la situación y lograr no sólo la estabilidad monetaria, sino también retomar una senda de crecimiento económico y terminar con los crónicos problemas de la economía argentina.

En estas circunstancias, asume Domingo Cavallo como nuevo ministro de Economía. Cavallo lanza el Plan de Convertibilidad que repercutiría de manera notable en la economía del país. Este plan implicaba no sólo el cambio de signo monetario, sino también respaldar la base monetaria con divisas extranjeras y bonos externos, pero además significó llevar a cabo una reforma a la carta orgánica del Banco Central, donde se le prohibía emitir dinero, salvo contra el ingreso de divisas. Esto presenta la desventaja de quitarle grados de libertad a la política monetaria, pero sin duda generaba confianza externa e interna. Lo anterior se complementó con la eliminación de las cláusulas indexatorias en los contratos.

El sostenimiento del plan suponía la generación de un permanente superávit fiscal que permitiera hacer frente al pago de los servicios de la deuda; esto se cumplió hasta 1994, año en que el "efecto tequila" provocará las primeras dudas sobre la eficacia del plan.

Asimismo se resuelve el problema de la deuda externa con la banca internacional, mediante el acceso al Plan Brady, que implicaba refinanciamiento de deuda por 30 años, pero que comprometió el futuro de las próximas generaciones por las elevadas remesas que se deben efectuar anualmente y que también requería de superávit fiscal. Por otro lado se realiza una apertura total de la economía, con una nueva estructura arancelaria, más baja y menos dispersa. Asimismo se genera un decreto para desregular la economía y bajar los costos empresarios.

Otro de los aspectos centrales de las reformas encaradas se manifiesta en el proceso privatizador que inicialmente se focaliza en las grandes empresas públicas, acusadas de ser las principales generadoras del déficit público. Para ello se acepta que parte del pago sea hecho con títulos de la deuda externa, de manera de reducir la misma, lo que resultó en un gran beneficio para los adquirentes, ya que compraban dichos títulos a precios de mercado, que resultaban muy inferiores a su valor nominal, y luego eran presentados al Estado teniendo en cuenta este último valor. Las privatizaciones resultaron ventajosas en cuanto a los cambios tecnológicos que

introdujeron, a la sensible mejora en los servicios y al aumento de inversión que generaron, pero como contrapartida encarecieron dichos servicios, contribuyeron a desnacionalizar la economía y dejan en manos extranjeras ciertos recursos estratégicos.

El problema que representaba el sistema previsional deficitario, por causas que exceden la naturaleza y objeto de este trabajo, fue encarada mediante la creación de un sistema de capitalización de los aportes jubilatorios, hecho que contribuyó a estimular el mercado de capitales, pero que deja irresuelto el remanente del sistema estatal de reparto, que seguirá constituyéndose en una pesada carga para el presupuesto público, en los años venideros.

La política social del gobierno resultó diametralmente opuesta a la realizada durante las anteriores administraciones peronistas, con desmantelamiento de las obras sociales, limitando el poder sindical, iniciando un proceso de flexibilización laboral y agudizando los problemas de la clase pasiva.

El plan comienza a flaquear a partir de su costado más sensible, la dependencia externa. La aparición del "efecto tequila" a fines de 1994 provocó una crisis financiera y bancaria que se prolongó durante todo 1995. Asimismo reapareció el déficit fiscal, lo que da lugar a una renovada presión tributaria que alcanza gran magnitud. Pero el problema más serio que presenta el modelo está dado por el crecimiento desmesurado del desempleo, que alcanzó los más altos niveles históricos, con la consiguiente secuela de problemas sociales, desnutrición, miseria, incremento de la delincuencia y una creciente resistencia sindical.

La actualidad

Es indudable que en la aplicación del modelo económico vigente, influyen aspectos externos, que se relacionan con el predominio en los últimos años de las ideas monetaristas y de la llamada "economía de la oferta". La caída del muro de Berlín terminó de resolver el conflicto Este-Oeste y el fenómeno globalizador atacó las bases de un sistema basado en el Estado benefactor, reverdeciendo las antiguas ideas neoclásicas del siglo XIX.

A su vez, "la tercera revolución industrial" posibilitó el desarrollo de tecnologías que se presentan como ahorradoras de mano de obra, alterando las formas tradicionales de la relación entre el capital y el trabajo.

La "desaparición" del problema que presentaba la posibilidad de revoluciones sociales, que atacaran la propiedad de los medios de producción, provocó una reacción de los sectores más poderosos, que se cuestionaron entre otras cosas, el mantenimiento de costosos sistemas de seguridad social que afectaban su rentabilidad.

La aplicación local de la "economía de la oferta" recogía en principio las bases principales de la misma, a saber: reducción de impuestos a los grandes capitales,

desregulación, estimular el aumento de productividad, incrementar el ahorro interno, facilitar la inversión, ampliar la recaudación impositiva mediante la ampliación de la base tributaria, eliminación de la inflación, eliminación del déficit fiscal, eliminar los factores que impliquen elevación de los costos laborales para mejorar la competitividad y una clara apertura económica.

Pero la situación argentina difiere sustancialmente de la que presentan los países centrales, con el agregado de una historia económica que muestra, como hemos visto anteriormente, vaivenes derivados de los distintos grupos que se alternaron en el poder. Es por esto que el modelo presenta semejanzas y diferencias con la base teórica ofertista.

En primer lugar, el sostenimiento del superávit fiscal alcanzado inicialmente no pudo mantenerse, ya que el Gasto público se incrementó, mientras se agudizaba la situación recesiva instalada desde fines de 1994, derivando en una caída de la recaudación fiscal. A esto se debe sumar el hecho de que más allá de la enunciación de la lucha contra la evasión, ésta aún se mantiene en niveles muy elevados.

En segundo término, la existencia de un régimen de convertibilidad funciona en la práctica como un freno a la expansión productiva, ya que genera una constante sobrevaluación del peso que afecta nuestras exportaciones, pese a que la reducción de costos laborales ha compensado en parte este efecto.

Asimismo, el modelo presenta una alta vulnerabilidad, dado que como vimos, depende en gran medida del ingreso de capitales, que se ha reducido sensiblemente. Es por eso que ahora se busca disminuir el déficit comercial, que inicialmente se aceptaba como una herramienta que posibilitaba frenar los precios internos, mediante el ingreso masivo de bienes importados. Por otra parte, la autoridad económica esperaba una deflación de precios, que nunca se produjo, salvo en algunos casos puntuales, lo que sin duda afecta el tipo de cambio real.

Igualmente, como sostuvimos en un trabajo anterior, es el propio modelo el que genera desempleo, desde el momento que induce el reemplazo de mano de obra por tecnología, además de no generar inversión duradera, ya que la mayoría de los capitales ingresados se vuelcan a la especulación financiera, a las privatizaciones (con mercados cautivos y de bajo riesgo), o en el mejor de los casos hacia el sector de los servicios, que como es sabido no tiene el efecto reproductivo del sector industrial.

Adicionalmente la política fiscal manejada con exclusivo "criterio de caja" afecta a las economías regionales, al mercado laboral y desprotege a la industria. Por su parte la descontrolada apertura económica no ofrece márgenes para una recuperación del sector secundario.

Las ideas predominantes significan excluir a importantes sectores de la población de los procesos productivos, relegando las funciones estatales a un mero asistencialismo, propio de épocas que se creían superadas. Asimismo los procesos desregula-

torios han favorecido los fenómenos de corrupción.

Los niveles de pobreza se han incrementado hasta límites alarmantes, con crecimiento de la marginalidad, con una tendencia disgregadora que acrecienta el fenómeno de fractura social, generando un creciente malestar popular, traducido en protestas sociales que retoman niveles crecientes.

Otro de los problemas que presenta el modelo radica en el hecho de que no se ha estimulado el ahorro interno, favoreciendo el consumo de bienes no esenciales y afectando el proceso de acumulación.

Por otra parte, los efectos del cambio en las condiciones del mercado de trabajo a nivel mundial se han hecho sentir en nuestro país. No se trata sólo del desempleo, sino también del temor que se genera en la gente empleada, ya que las evaluaciones de desempeño cambiaron en forma drástica en muchas organizaciones; el trabajador no sólo debe cumplir con sus tareas y recibir órdenes, sino que debe asumir mayores responsabilidades e incluso tomar decisiones.

El achatamiento de las antiguas jerarquías laborales implica que las formas de progreso en el empleo no son los clásicos "peldaños", sino que asume cierta horizontalidad. Esto podría redundar en mejoras en la productividad, pero no hay duda que a nivel personal puede resultar desestabilizante. Al respecto se hace imprescindible que los procesos flexibilizadores incluyan capacitación continua y respeto hacia el empleado, premiando el accionar de aquéllos que adoptan eficazmente la tarea de capacitarse.

Finalmente, el reciente relevo del ministro Cavallo ha puesto al desnudo la magnitud del déficit fiscal, lo que se traduce en el intento de elevar aún más los impuestos y de provocar severos recortes en el Gasto público. Esto sin duda afecta el ya deprimido nivel de actividad interna y pone de manifiesto que el desempleo no es algo pasajero, sino un fenómeno de naturaleza estructural que vino para quedarse por largo tiempo.

En conclusión, hemos entrado en un círculo vicioso, dado que los empresarios para poder mantener sus ganancias, reducen salarios, lo que contribuye a que se reduzca la demanda global, es decir bajan los consumos, cae la producción y esto agudiza el desempleo. Si se intenta cubrir el bache con el sector externo, las PYMES tienen dificultades para exportar por la imposibilidad de aplicar economías de escala y las grandes empresas se ven limitadas por el freno cambiario.

El Futuro

Siempre resulta difícil hacer proyecciones, pero una de las misiones que tenemos los economistas consiste en imaginar posibles escenarios, utilizando las herramientas que nos brindan la teoría económica y la estadística económica, pero también recogiendo las enseñanzas históricas y aún la experiencia personal.

Hay un hecho evidente e insoslayable, la globalización económica. Pensar en

retornar a políticas de los años anteriores a la crisis petrolera resulta descabellado. Los cambios que se dieron en la economía mundial y que repercutieron en la nuestra son datos de la realidad y debemos atenernos a ellos. Pero esto no implica aceptar los principios globalizadores en forma dogmática, sino tratar de encontrar caminos que no ignoren dicho fenómeno, pero que permitan una adaptación a nuestra estructura económica y social.

En este punto debemos considerar que no es posible separar la economía de los aspectos sociopolíticos. Al respecto pueden ocurrir varias cosas: la primera sería el mantenimiento tozudo del programa económico ignorando las demandas sociales. Esto resultaría claramente negativo, no sólo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista económico, implicando el mantenimiento de rígidas posiciones y una vuelta a lo que Paul Samuelson ha definido claramente como el retorno a la "estupidez ortodoxa" anterior a 1930. En cambio, el camino aconsejable sería introducir modificaciones al modelo, de manera que se puedan mantener los logros alcanzados, pero al mismo tiempo alterar las condiciones que han llevado a la recesión y al desempleo. Ese camino pasa inevitablemente por una amplia concertación social, que acote los mecanismos del mercado, que imponga límites a la flexibilización laboral y a la apertura indiscriminada, que impulse la capacitación masiva de la masa laboral, que reasigne recursos estatales, que no desproteja excesivamente a la industria y que mejore el perfil de nuestras exportaciones.

Se hace necesario entre las rectificaciones al modelo, la implementación de una clara política industrial, acorde con los cambios producidos, pero que permita competir en condiciones de igualdad frente al producto extranjero. En este sentido debemos recoger la enseñanza histórica que muestra que para crecer no sólo hay que abrir la economía y valga como ejemplo lo sucedido con los países del sudeste asiático, que han instrumentado políticas industrialistas con liberación de importaciones en forma selectiva y promoviendo en forma clara las exportaciones con alto valor agregado. No es entonces el caso argentino, donde la constante apreciación del peso, resulta en elevados costos internos medidos en dólares.

Es de destacar que los cambios apuntados por el fenómeno globalizador provocaron cambios en los comportamientos empresarios, sobre todo en la pequeña y mediana empresa.

En otras épocas el empresario era un "tomador de decisiones", dada la pesada influencia estatal mediante regulaciones. Hoy los mercados se han dinamizado, ya no basta con conocer la ecuación costo-beneficio, sino que hay que pensar en la productividad, en los costos de oportunidad, en el conocimiento pleno de la competencia, en la mejora de la calidad. Se hace necesario conocer la macroeconomía, la mayor o menor integración, si existe o no superávit fiscal, etc. Por todo esto, en los mecanismos de concertación, debe incluirse un compromiso empresarial para mejorar los aspectos productivos y de calidad, pero al mismo tiempo, comprometerse

a transferir parte del incremento de productividad a la generación de nuevos puestos de trabajo y/o a los salarios.

A su vez, debe resaltarse que el mantenimiento de la apertura económica, deberá tener en cuenta las diferentes estructuras de precios relativos y los regímenes de subsidios, de lo contrario se generan situaciones de competencia desleal frente a productos extranjeros, que en muchos casos, p.ej. los provenientes del sudeste asiático, tienen bajo costo salarial. Esto no es ni más ni menos que tener en cuenta la competitividad genuina. De lo contrario, no serviría de mucho mejorar la calidad de los productos internos, buscando aumentar las ventas, frente a la restricción presupuestaria de los consumidores por los bajos ingresos, que los lleva a elegir por precio antes que por calidad.

Por supuesto que esta problemática implicará la discusión del mantenimiento o no del régimen de convertibilidad, que se traducirá en uno de los debates centrales para los próximos años, ya que resulta imprescindible superar la contradicción de tener todos los precios de la economía liberados, mientras se mantiene controlado uno de los precios principales de la misma como es el tipo de cambio.

Otro de los aspectos a reconsiderar es el de la recreación de la estructura social, superando aquella fractura que habíamos mencionado, para lo cual el Estado deberá asumir en plenitud sus responsabilidades, salvando la carencia de horizonte social que caracteriza al mercado y dotándolo de una humanización que supere el creciente individualismo.

Se trata además de consolidar el camino hacia una cierta identidad nacional. Camino que fuera abandonado en forma terminante. No se trata de caer en chauvinismos superados, pero si de recrear condiciones culturales que nos distingan y que tomen en cuenta las necesidades y los deseos de nuestra población. Y cuando hablamos de cultura lo hacemos en sentido amplio, por lo que no podemos soslayar el plano económico y sus repercusiones sociales.

Conclusiones

- 1) La economía argentina recorrió un largo y sinuoso camino en las últimas cuatro décadas, con crisis recurrentes, debido a la larga disputa entre los que buscaron la autarquía y los que pretendieron insertar a la Argentina en las corrientes económicas mundiales, mediante la aplicación de políticas de corte liberal.
- 2) Antes de resolverse la disputa mencionada, hubo una aceptación tácita por gran parte de la sociedad, de la necesidad de aplicar reformas estructurales acordes con los cambios que se producían en el mundo.
- 3) La controversia se resolvió en favor de la corriente liberal, aunque con algunos elementos de naturaleza heterodoxa.
- 4) El plan de convertibilidad logró resultados importantes en lo referido a las reformas que implicaban aumentos de productividad y eliminación de trabas a la

inversión privada, a la actividad financiera y comercial y a la inserción plena de nuestra economía en el contexto internacional.

5) Asimismo, la rigidez del plan genera condiciones que llevan a la recesión, al desempleo y a la exclusión social.

6) Por lo tanto se torna imprescindible aplicar rectificaciones, que contribuyan a superar los aspectos negativos que presenta el plan.

7) Las rectificaciones pasan por la concertación social, la aplicación selectiva de aranceles, la capacitación laboral masiva, la promoción de exportaciones industriales, el replanteo del mantenimiento de la convertibilidad, el estímulo al desarrollo de las PYMES que son fuertes generadoras de empleo, la orientación de los capitales de los fondos de pensión, para dirigirlos aunque sea en parte hacia proyectos productivos y no hacia la mera especulación financiera, el apoyo a las economías regionales, la reorientación del Gasto público tratando de disminuir el gasto improductivo y volcándolo a las actividades antes mencionadas, etc. Esta lista no es exhaustiva y sólo pretende dar pautas para un cambio de rumbo.

8) En las puertas del siglo XXI y en un contexto globalizado, se hace necesaria la adopción de políticas económicas maduras, racionales y continuas, pero que se orienten a mejorarle la vida a la población y no que tengan como único norte la eficiencia, ya que resulta socialmente inaceptable el sostenimiento de modelos excluyentes, además de provocar desde un punto de vista económico, la limitación a un crecimiento sostenido.

BIBLIOGRAFÍA

- AZCURRA H., Silva A., Verdes S. *Impactos estructurales sobre el empleo*, Univ. del Salvador - Fac.Cs.Económicas, Trabajo de investigación, Abril 1994.
- FERRER, Aldo. *La Economía Argentina*, Fondo de Cultura Económica, 1981.
- KOSKOFF Bernardo. *La industrialización desarticulada*, CEPAL, 1991.
- SAMUELSON Paul. "Las lecciones para Europa", en *Clarín Económico*, junio 1996.
- SELIM S., SILVA A., VERDES S. "Los empresarios frente a la convertibilidad", en *El empresario PYME*, agosto 1993, nro.52.
- SILVA A. *Estado y economía. Los roles estatales en la economía globalizada*, Univ. del Salvador, marzo 1996